



PRIMERA SALA REGIONAL COLEGIADA EN MATERIA CIVIL, ZONA 01 TUXTLA, DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CHIAPAS.- Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 9 nueve de agosto de 2024 dos mil veinticuatro. - - -

V I S T O S para resolver los autos del toca número **314-B-1C01/2024**, formado con motivo al recurso de apelación interpuesto por el licenciado **WILMAR JOE SOLIS RODRIGUEZ**, mandatario judicial de *****
* **** ** *****
la sentencia definitiva de 24 de mayo de 2024 dos mil veinticuatro, pronunciada por el Juez del Ramo Civil del Distrito Judicial de COPAINALÁ, con residencia en Copainalá, Chiapas, en el expediente número **96/2017**, relativo al Juicio Ordinario Civil de Nulidad de Testamento y Donación, promovido por *****

, en contra de *****
licenciado **LUIS ALBERTO ALBORES FIGUEROA**, en su calidad de notario público número 178 del Estado y **DELEGADO DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE COPAINALÁ, CHIAPAS**; y

R E S U L T A N D O:

1º.- En la fecha arriba señalada y dentro del procedimiento de referencia, el juez pronunció la sentencia recurrida, cuyos puntos resolutivos literalmente establecen: - - - - -

“...PRIMERO:- *Se ha tramitado legalmente el presente JUICIO ORDINARIO CIVIL DE NULIDAD DE ESCRITURA,*

*promovido por ***** ***** ***** ***** * **** ** *****
***** ******, en contra de **NOTARIO PUBLICO NUMERO 178**
licenciado **LUIS ALBERTO ALBORES FIGUEROA FIGUEROA,**
****** ***** ****** **como ALBACEA TESTAMENTARIA Y**
DONATARIA; ****** ***** ***** ****** **Y DELEGADO DEL**
REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO
DEL DISTRITO JUDICIAL DE COPAINALÁ CHIAPAS; en el
que la parte actora no acreditó los elementos constitutivos de
sus pretensiones, y los demandados comparecieron a juicio; en
consecuencia.- - - - -
SEGUNDO.- Se absuelve a los demandados de las prestaciones
que les fueron reclamadas.- - - - -
TERCERO:- No se hace especial condena de costas.-
CUARTO: NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE...” (SIC). - - - - -

2º.- Inconforme con la resolución de referencia, el
licenciado **WILMAR JOE SOLIS RODRIGUEZ,** mandatario
judicial de ***** ***** ***** ***** * **** ** ***** *****
******,* interpuso recurso de apelación mismo que le fue admitido
por el juez natural en ambos efectos.-

3º.- Mediante escrito de 10 diez de junio del 2024 dos mil
veinticuatro, el apelante expresó agravios, mismos que
textualmente se transcriben: - - - - -

“...AGRAVIOS.- FUENTE DEL AGRAVIO.- Manifestó a su
señoría que me causa agravios el auto antes señalado, toda vez
que, en él, a foja dieciséis en el considerando IV dice lo siguiente:
“Por lo que hace a la prueba pericial en dactiloscopia, esta no fue
desahogada por la inasistencia del notario público número178 del
estado, Licenciado Luis Alberto Albores Figueroa, a la diligencia
programada el 22 de marzo de 2023, por el juzgado exhortado,



consecuentemente, mediante proveído de fecha 29 de marzo de 2023, a solicitud del mandatario judicial de los actores, el juez exhortado, hizo efectivo el apercibimiento decretado en 05 de septiembre de 2022 por este juzgado, teniéndose por ciertas las afirmaciones de la actora en relación a la existencia de las documentales que dejo de exhibir el referido fedatario público, de conformidad con el artículo 295 del código de procedimientos civiles; más no así lo relativo a la nulidad de la escritura pública, ya que con un apercibimiento al fedatario público, no se acredita que el donante no haya manifestado su voluntad para celebrar el contrato de donación, pues esa no es la prueba idónea; ya que para saber si es la huella o no del extinto ***** ***** ***** , la única forma de saberlo es a través del desahogo de la prueba pericial en dactiloscopia, donde lo debatido sería motivo de estudio minucioso por peritos en la materia que determinen si efectivamente la huella controvertida pertenece o no al referido extinto.” En consecuencia, de lo anterior, el juez en primera instancia en el resolutivo segundo resolvió: “Se absuelve a los demandados de las prestaciones que fueron reclamadas”.-

PRIMER AGRAVIO.- Empecemos hablando del testamento público abierto pasado ante la fe del NOTARIO PUBLICO NUMERO 178 cuyo titular es el licenciado LUIS ALBERTO ALBORES FIGUEROA, misma documental que está registrada como la escritura número 1614 volumen 25; sobre este instrumento público en particular, contrario a lo referido por el juez de primera instancia, **la ley del notariado del estado de Chiapas en su artículo 176 y 202 fracción VIII concatenado con el artículo 1497 y 1505 del código civil del estado de Chiapas** establecen la que a continuación se transcribe: **LEY DEL NOTARIADO DEL ESTADO DE CHIAPAS.- ARTICULO 176.- ARTICULO 176.- ARTICULO 202.- CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE CHIAPAS.- ART. 1497.- ART. 1505.- (ARTICULOS TRANSCRITOS).** De los artículos antes transcritos se desprende que uno de los requisitos sine quanon que deben reunir los testamentos evidentemente es que dicho instrumento

notarial tenga la firma del testador, además de que dicho instrumento debe dar aviso a la dirección general de notarías, requisitos que no se cumplen en la especie, esto quedo plenamente demostrado con la **pericial en grafoscopia a cargo del perito RITO MARTIN CERVANTES REYES** misma que se tiene por cierta en relación al hecho de que dicha escritura no contiene la firma del testador y por ende el nunca expreso su voluntad, se arriba a esta conclusión porque cuando se citó al NOTARIO PUBLICO NUMERO 178 cuyo titular es el LICENCIADO LUIS ALBERTO ALBORES FIGUEROA, se le apercibió en términos del artículo 295 del código de procedimientos civiles del estado de Chiapas, que si no comparecía con el protocolo del multicitado documento que se tilda de nulo, se le haría efectivo el mencionado arábigo, mismo que a la letra dice: **Artículo 295.-** (artículo transcrito), Del anterior artículo se desprende que dicho artículo establece que si una de las partes no exhibe los documentos que tiene en su poder, se tendrá por cierta las afirmaciones de la contraparte, y eso ocurrió en la especie, pues el juez exhortado de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, no solo le apercibió al notario en términos del artículo antes transcrito, sino que al advertir que el notario multicitado no compareció dolosamente y por ende no exhibió en la audiencia el referido protocolo del instrumento antes mencionado, le hizo efectivo el apercibimiento en términos del artículo 295 del código de procedimientos civiles del estado de Chiapas, y decreto que se tiene por cierta las afirmaciones de la parte actora del presente juicio, con lo cual quedó demostrado en el presente juicio que el protocolo del testamento público abierto pasado ante la fe del NOTARIO PUBLICO NUMERO 178 cuyo titular es el LICENCIADO LUIS ALBERTO ALBORES FIGUEROA misma documental que está registrada como la escritura número 1614 volumen 25, carece de la firma y huella dactilar del testador aunado a que en su momento el notario no dio aviso de dicho instrumento a la dirección general de notarías tal y como lo establece nuestra legislación civil y la ley del notariado ambos del



estado de Chiapas, lo cual, contrario a lo resuelto por el juez de primera instancia, hace que sea invalido dicho instrumento y como consecuencia debe declararse nulo. – Aunado a lo anterior, no debe pasar desapercibido a este H. Sala Civil, que cuando fue la audiencia confesional del NOTARIO PUBLICO NUMERO 178 cuyo titular es el LICENCIADO LUIS ALBERTO ALBORES FIGUEROA, el no compareció a dicha audiencia a pesar de estar debidamente notificado de la misma, razón por la cual quedó confeso en términos del artículo 316 del código de procedimientos civiles vigente en la entidad, de las posiciones que se calificaron de legales del pliego de posiciones ofertadas y exhibidas de la parte actora, y dentro de esas posiciones que se calificaron de legales y de las cuales esta confeso, se encuentra en donde el admití (sic) que el testador no plasmó la firma en el protocolo del testamento público abierto pasado ante la fe del NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 178 cuyo titular es el LICENCIADO LUIS ALBERTO ALBORES FIGUEROA misma documental que está registrada como la escritura número 1614 volumen 25, luego entonces queda plenamente demostrado que el instrumento antes mencionado no cumple con los requisitos antes expuestos y por ende debe declararse la nulidad absoluta del testamento público abierto pasado ante la fe del NOTARIO PÚBLICO NUMERO 178 cuyo titular es el LICENCIADO LUIS ALBERTO ALBORES FIGUEROA misma documental que está registrada como la escritura número 1614 volumen 25. – SEGUNDO AGRAVIO. Ahora hablemos del contrato de donación pura y simple y a título gratuito pasado ante la FE del NOTARIO PUBLICO NUMERO 178 cuyo titular es el LICENCIADO LUIS ALBERTO ALBORES FIGUEROA, misma documental que está registrada como la escritura número 487 volumen 07 de fecha 24 de septiembre de 2014; sobre este instrumento público en particular, la ley del notariado del estado de Chiapas en su artículo 157 fracción XII inciso “E” y 202 fracción VIII concatenado con el artículo 2318 del código civil del estado de Chiapas establecen lo que a continuación se transcribe: -- (Transcribe artículo). – De los

artículos antes transcritos se desprende que uno de los requisitos sine quanon que deben reunir las donaciones es que estas se hagan en escritura pública, la cual contendrá la firma o huella digital del donante, requisitos que no se cumplen en la especie, esto quedó plenamente demostrado con la pericial en dactiloscopia a cargo del perito RITO MARTÍN CERVANTES REYES, misma que se tiene por cierta en relación al hecho de que dicha escritura no contiene la firma o huella digital del donante y por ende el nunca expresó su voluntad, se arriba a esta conclusión porque cuando se citó al NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 178 cuyo titular es el LICENCIADO LUIS ALBERTO ALBORES FIGUEROA, se le apercibió en términos del artículo 295 del código de procedimientos civiles del estado de Chiapas, que si no comparecía con el protocolo del multicitado documento que se tilda de nulo, se le haría efectivo el mencionado arábigo, mismo que a la letra dice: -- (Tesis transcrita). – Del artículo se desprende que dicho artículo establece que si una de las partes no exhibe los documentos que tiene en su poder, se tendrá por cierta las afirmaciones de la contraparte, y eso ocurrió en la especie, pues el juez exhortado de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, no solo le apercibió al notario en términos del artículo antes transcrito, sino que al advertir que el notario multicitado no compareció dolosamente y por ende no exhibió en la audiencia el referido protocolo del instrumento antes mencionado, le hizo efectivo el apercibimiento en términos del artículo 295 del código de procedimientos civiles del estado de Chiapas, y decretó que se tiene por cierta las afirmaciones de la parte actora del presente juicio, con lo cual quedó demostrado en el presente juicio que el protocolo del contrato de donación pura y simple y a título gratuito pasada ante la fe del NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 178 cuyo titular es el LICENCIADO LUIS ALBERTO ALBORES FIGUEROA misma documental que está registrada como la escritura número 487 volumen 07 de fecha 24 de septiembre de 2014, carece de la firma y huella digital del donante, requisitos que mencionan y establecen nuestra legislación civil y la ley del notariado ambos



del estado de Chiapas, lo cual contrario a lo que menciona el juez de primera instancia, hace que sea invalido dicho instrumento y como consecuencia debe declararse nulo. – Aunado a lo anterior, no debe pasar desapercibido a esta H. Sala Civil, que cuando fue la audiencia confesional del NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 178 cuyo titular es el LICENCIADO LUIS ALBERTO ALBORES FIGUEROA, el no compareció a dicha audiencia a pesar de estar debidamente notificado de la misma, razón por la cual quedó confeso en términos del artículo 316 del código de procedimientos civiles vigente en la entidad, de las posiciones que se calificaron de legales del pliego de posiciones ofertadas y exhibidas de la parte actora, y dentro de esas posiciones que se calificaron de legales y de las cuales esta confeso, se encuentra en donde el admití (sic) que el donante no plasmó la firma ni huella digital en el protocolo del contrato de donación pura y simple y a título gratuito pasado ante la fe del NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 178 cuyo titular es el LICENCIADO LUIS ALBERTO ALBORES FIGUEROA misma documental que está registrada como la escritura número 487 volumen 07 de fecha 24 de septiembre de 2014, luego entonces queda PLENAMENTE DEMOSTRADO que el instrumento antes mencionado no cumple con los requisitos antes expuestos y por ende debe declararse la nulidad absoluta del contrato de donación pura y simple y a título gratuito pasado ante la fe del NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 178 cuyo titular es el LICENCIADO LUIS ALBERTO ALBORES FIGUEROA misma documental que está registrada como la escritura número 487 volumen 07 de fecha 24 de septiembre de 2014.– En consecuencia, de lo antes expuesto, SOLICITO a la Superioridad al constatar los fundamentos de estos agravios REVOQUE la sentencia definitiva dictado por el inferior.” - - - - -

4º.- Por auto de 4 cuatro de julio de 2024 dos mil veinticuatro, ésta Sala formó el toca número 314-B-1C01/2024,

confirmó la calificación del grado hecha por el juez natural y tuvo por legalmente admitido el recurso en ambos efectos. - - - - -

5º.- Agotados los trámites legales dentro de ésta Segunda Instancia, por corresponder al estado de los autos, se citó a las partes para oír sentencia, la que ahora se engrosa; y, - - - - -

C O N S I D E R A N D O:

I. Que esta Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01 Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, es legalmente competente para conocer y resolver del recurso de apelación interpuesto, de conformidad con lo establecido por los artículos 686-A, del Código de Procedimientos Civiles, aplicable al caso, 49 y 59, fracción I, del Código de Organización del Poder Judicial, ambos del Estado de Chiapas, por impugnarse una resolución dictada por un juzgado de primera instancia del Distrito Judicial de Tuxtla que se encuentra dentro del ámbito territorial en el que ejerce jurisdicción ésta Sala Civil.- - - - -

II. Mediante a lo dispuesto por el artículo 663 del Código Adjetivo Civil vigente en el Estado de Chiapas, el recurso de apelación tiene por objeto que el Tribunal de Segunda instancia confirme, revoque o modifique la determinación judicial combatida.- - - - -

III. Los agravios expresados por el licenciado WILMAR JOE SOLIS RODRÍGUEZ, en su calidad de mandatario judicial de la parte actora en el juicio natural, resultan en una parte



infundados e inoperantes en otra, como a continuación se justificará.- - - - -

En su primer agravio aduce esencialmente que, le causa lesión la sentencia definitiva de 24 de mayo de 2024, porque el juez natural declaró improcedente el juicio ordinario civil de nulidad de testamento público abierto celebrado en la escritura pública número 1614, volumen número 25, de 30 de junio de 2016, pasado ante la fe del licenciado LUIS ALBERTO ALBORES FIGUEROA, en su calidad de notario público número 178 del Estado, celebrado entre ***** ***** ***** , en su carácter de testador (ahora extinto) y ***** * ***** ***** ** ***** ***** ***** , violentando los artículos 176 y 202 de la Ley del Notariado del Estado de Chiapas y 1497 y 1505 del Código Civil del Estado, porque asegura que si una de las partes no exhibe los documentos que tiene en su poder se tendrá por cierta las afirmaciones de la contraparte, de acuerdo a lo establecido en el artículo 295 del Código de Procedimientos Civiles del Estado; por ello, aduce que el protocolo del testamento carece de la firma y huella dactilar del testador; además alega que en la audiencia confesional a cargo del licenciado LUIS ALBERTO ALBORES FIGUEROA, en su calidad de notario público número 178 del Estado, no compareció a la diligencia y que se le tuvo por confeso en términos del artículo 316 del Código Procesal Civil del Estado; por tanto, solicita se revoque la sentencia recurrida. - - - - -

El presente argumento defensivo resulta infundado, toda vez que el juez natural de forma correcta, fundada y motivada declaró improcedente el juicio ordinario civil de nulidad de



manifestando que el testador no firmo ni es su huella la que aparece en el referido testamento, ofreciendo entre otras pruebas, la prueba pericial en materias de grafoscopia y dactiloscopia a cargo del licenciado RITO MARTIN CERVANTES REYES, señalando los puntos sobre los que versaría la citada probanza; sin embargo, no procuró el desahogo de la citada prueba, lo que era menester por ser idónea para acreditar su acción intentada; por ende, al tratarse de una materia que es de estricto derecho, este Cuerpo Colegiado se encuentra impedido para subsanar descuidos o desinterés de las partes litigantes (actores y codemandados); así que, deben resentir las consecuencias jurídicas que tal descuido les depara y en ese sentido su agravio es por demás infundado.

De manera que, al no vigilar el correcto y oportuno desahogo de la prueba pericial en materia de dactiloscopia, que en este caso es la prueba idónea, por cuanto que pretende la nulidad absoluta de la escritura pública número 1614, volumen número 25, de 30 de junio de 2016, pasado ante la fe del licenciado LUIS ALBERTO ALBORES FIGUEROA, en su calidad de notario público número 178 del Estado, celebrado entre ***** ***** ***** , en su carácter de testador (ahora extinto) y ***** * ***** ***** ** ***** ***** ***** , porque manifestó que el testador no firmo ni es su huella la que aparece en el referido testamento; pues el hecho de que se haya tenido por ciertos los hechos de su demanda y que se haya declarado confeso al licenciado LUIS ALBERTO ALBORES FIGUEROA, en su calidad de notario público número 178 del Estado, si bien es verdad merece valor en términos de los artículos 295 y 316 del Código Adjetivo Civil del Estado; empero, no merece el alcance

pretendido, por cuanto que se itera, la prueba idónea para demostrar que la huella que aparece en el testamento no corresponde al testador, es la pericial en materia de dactiloscopia; así que, su agravio es totalmente infundado.- - - -

Para soportar lo anterior, debe aplicarse por identidad jurídica la tesis aislada bajo registro número 210315, sustentada por el tercer tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito, de la octava época, tomo XIV, octubre de 1994, visible en la página 385, del semanario judicial de la federación, que instituye:- - - - -

“VALOR Y ALCANCE PROBATORIOS. DISTINCION CONCEPTUAL. AUNQUE UN ELEMENTO DE CONVICCION TENGA PLENO VALOR PROBATORIO, NO NECESARIAMENTE TENDRA EL ALCANCE DE ACREDITAR LOS HECHOS QUE A TRAVES SUYO PRETENDA DEMOSTRAR EL INTERESADO. *La valoración de los medios de prueba es una actividad que el juzgador puede realizar a partir de cuando menos dos enfoques; uno relacionado con el continente y el otro con el contenido, el primero de los cuales tiene como propósito definir qué autoridad formal tiene el respectivo elemento de juicio para la demostración de hechos en general. Esto se logrará al conocerse qué tipo de prueba está valorándose, pues la ley asigna a los objetos demostrativos un valor probatorio pleno o relativo, previa su clasificación en diversas especies (documentos públicos, privados, testimoniales, dictámenes periciales, etcétera. Código Federal de Procedimientos Civiles, Libro*

*Primero, Título Cuarto), derivada de aspectos adjetivos de aquéllos, tales como su procedimiento y condiciones de elaboración, su autor y en general lo atinente a su génesis. El segundo de los enfoques en alusión está vinculado con la capacidad de la correspondiente probanza, como medio para acreditar la realización de hechos particulares, concretamente los afirmados por las partes. A través de aquél el juzgador buscará establecer cuáles hechos quedan demostrados mediante la prueba de que se trate, lo que se conseguirá al examinar el contenido de la misma, reconociéndose así su alcance probatorio. De todo lo anterior se deduce que el valor probatorio es un concepto concerniente a la autoridad formal de la probanza que corresponda, para la demostración de hechos en general, derivada de sus características de elaboración; a diferencia del alcance probatorio, que únicamente se relaciona con el contenido del elemento demostrativo correspondiente, a fin de corroborar la realización de los hechos que a través suyo han quedado plasmados. **Ante la referida distinción conceptual, debe decirse que la circunstancia de que un medio de convicción tenga pleno valor probatorio no necesariamente conducirá a concluir que demuestra los hechos afirmados por su oferente, pues aquél resultará ineficaz en la misma medida en que lo sea su contenido; de ahí que si éste es completamente ilegible, entonces nada demuestra, sin importar a quién sea imputable tal deficiencia o aquélla de que se trate.**" - -*

De igual forma, debe aplicarse la tesis aislada bajo registro número 2011599, sustentada por el décimo cuarto tribunal colegiado en materia civil del primer circuito, de la décima época, tomo IV, mayo de 2016, visible en la página 2799, del semanario judicial de la federación, que es del epígrafe siguiente:- - - - -

***HUELLA DACTILAR. ES APTA PARA ACREDITAR EL
CONSENTIMIENTO EN LA CELEBRACIÓN DE UN
CONTRATO.***

La huella dactilar es un elemento jurídicamente reconocido para demostrar tanto la individualización de su autor como la manifestación de su voluntad con el contenido de un documento, porque es más idónea para individualizar al sujeto, pues las técnicas dactiloscópicas desarrolladas permiten afirmar que no hay dos personas que posean idénticas huellas dactilares; en cambio, los caracteres de la letra pueden ser imitados y, en algunos casos, podrá resultar difícil al perito decidir sobre la autenticidad de una firma. Como ejemplo de la eficacia de esa función individualizadora se tiene el artículo 76 del Código Civil para el Distrito Federal, que concibe a la huella como una firma útil para identificar a los nacidos en un parto múltiple. Por lo que toca a la función de acreditar la manifestación del consentimiento, el citado código prevé diversos supuestos, como por ejemplo, la solicitud del matrimonio (artículo 97, fracción III, segundo párrafo) y la celebración misma de éste (artículo 103, fracción IX, tercer párrafo). Tratándose de los contratos, la impresión de la huella cumple esa doble función, pues si bien es cierto que dicho código en su artículo 1834 establece como

requisito adicional la firma de la persona que intervenga a ruego del autor de la huella, ello ocurre de manera excepcional para los casos en que éste no sepa o no pueda leer ni escribir, pero aun en este caso el conocimiento del contenido del documento y, en consecuencia, la eficacia de la manifestación de la voluntad del autor respecto del contenido del contrato, se asegura con la necesidad de la intervención de la persona que solicite el autor. De esta manera, si en un contrato se encuentran plasmadas huellas atribuidas a una de las partes acompañadas de firmas igualmente atribuidas a él, quedando demostrado que dichas huellas sí corresponden a dicho autor, debe tenerse por acreditado el consentimiento en la celebración del contrato, incluso, con independencia de que la prueba pericial haya determinado la falsificación de las firmas correspondientes, más aún cuando el autor no negó expresamente haber estampado sus huellas en el contrato.”- - - - -

Aunado que, las disposiciones legales que regulan la prueba a cargo de peritos, han sustentado que la peritación (que propiamente es el conjunto de actividades, experimentos, observaciones y técnicas desplegadas por los peritos para emitir su dictamen), es una actividad procesal desarrollada en virtud de encargo judicial, por personas distintas de las partes del proceso, especialmente calificadas por sus conocimientos técnicos, clínicos, artísticos, prácticos o científicos, mediante la cual se suministran al Juez argumentos o razones para la formación de su convicción respecto de ciertos hechos cuya

percepción, entendimiento o alcance, escapa a las aptitudes del común de la gente, por lo que se requiere esa capacidad particular para su adecuada percepción y la correcta verificación de sus relaciones con otros hechos, de sus causas, de sus efectos o simplemente para su apreciación e interpretación. - - -

En ese sentido, el perito es un auxiliar técnico de los tribunales en determinada materia, y como tal, su dictamen constituye una opinión ilustrativa sobre cuestiones técnicas emitidas bajo el leal saber y entender de personas diestras y versadas en materias que requieren conocimientos especializados, expresados en forma lógica y razonada, de tal manera que proporcionen al juzgador elementos suficientes para orientar su criterio en materias que éste desconoce. Ese carácter ilustrativo u orientador de los dictámenes periciales es lo que ha llevado a destacar que los peritajes no vinculan necesariamente al juzgador, asignándoles la eficacia demostrativa que en realidad merezcan, y está en aptitud de valorar en su justo alcance todas y cada una de las pruebas que obren en autos. - - - - -

Así que, la prueba pericial tiene por objeto que personas calificadas, con conocimientos especiales en alguna ciencia o arte, ilustren al juzgador sobre cuestiones técnicas que escapan al conocimiento común de las personas, por lo que es claro que a los peritos, en tanto coadyuvantes del Juez, les corresponde exponer a éste los elementos de juicio necesarios, mediante aseveraciones debidamente razonadas y sustentadas en circunstancias objetivas que esclarezcan el hecho controvertido para que el Juez se forme convicción sobre el tema a debate y,



con vista en el resto del material probatorio, si lo hay, resuelva la contienda judicial llevada a su potestad. - - - - -

Además, debe decirse que si bien es cierto la acción y la excepción de nulidad por falta de forma o vicios del consentimiento compete a todos los interesados, esto es, de acuerdo al artículo 2203 del Código Civil del Estado; además que, con base a los numerales 2199 y 2200 ídem, produce la nulidad del acto jurídico por la ilicitud en el objeto, en el fin o en la condición del acto, que la nulidad absoluta por regla general no impide que el acto produzca provisionalmente sus efectos; no obstante, no demostraron su acción intentada, como es su deber hacerlo en términos del artículo 289 del Código de Procedimientos Civiles del Estado.- - - - -

Los numerales 2199, 2200, 2201 y 2202, del Código Sustantivo Civil del Estado, establecen lo siguiente:- - - - -

“ARTÍCULO 2199.- LA ILICITUD EN EL OBJETO, EN EL FIN O EN LA CONDICION DEL ACTO, PRODUCE SU NULIDAD, YA ABSOLUTA, YA RELATIVA, SEGUN LO DISPONGA LA LEY.”- - - - -

“ARTÍCULO 2200.- LA NULIDAD ABSOLUTA POR REGLA GENERAL NO IMPIDE QUE EL ACTO PRODUZCA PROVISIONALMENTE SUS EFECTOS, LOS CUALES SERAN DESTRUIDOS RETROACTIVAMENTE CUANDO SE PRONUNCIE POR EL JUEZ LA NULIDAD. DE ELLA PUEDE PREVALERSE TODO INTERESADO Y NO DESAPARECE POR LA CONFIRMACION O LA PRESCRIPCION.”- - - - -

“ARTÍCULO 2201.- LA NULIDAD ES RELATIVA, CUANDO NO REUNE TODOS LOS CARACTERES ENUMERADOS EN EL ARTICULO ANTERIOR. SIEMPRE PERMITE QUE EL ACTO PRODUZCA PROVISIONALMENTE SUS EFECTOS.”- - - - -

“ARTÍCULO 2202.- LA FALTA DE FORMA ESTABLECIDA POR LA LEY, SI NO SE TRATA DE ACTOS SOLEMNES, ASI COMO EL ERROR, EL DOLO, LA VIOLENCIA, LA LESION, Y LA INCAPACIDAD DE CUALQUIERA DE LOS AUTORES DEL ACTO, PRODUCE LA NULIDAD RELATIVA DEL MISMO.”- - - -

En ese sentido, haciendo una interpretación sistemática y gramatical de los preceptos legales antes transcritos, puede concluirse de forma explícita que produce la nulidad del acto jurídico por la ilicitud en el objeto, en el fin o en la condición del acto, que la nulidad absoluta por regla general no impide que el acto produzca provisionalmente sus efectos, pudiéndola invocar todo interesado; no obstante, las pruebas señaladas por los actores resultan insuficientes e ineficaces para pretender la nulidad absoluta del testamento público abierto celebrado en el instrumento notarial número 1614, volumen 25, de 30 de junio de 2016, como erradamente lo pretenden; así que, su acción es improcedente; puesto que para estar en condiciones de hacerlo, deben demostrar de forma apriorística el hecho ilícito o los vicios del consentimiento que aseguran existió en el acto jurídico antes citado (falta de firma y de huella del testador); pues no debe soslayarse que las causas que pueden dar lugar a demandar la nulidad se encuentran previstas en la ley, como son: la ilicitud en el objeto, en el fin o en la condición del acto, la falta de forma exigida por la legislación civil, el error, el dolo, la violencia, la



lesión y la incapacidad de cualquiera de las partes, esto es, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 2199, 2200, 2201 y 2202 del Código Sustantivo Civil del Estado, antes transcritos.-----

Para fortalecer lo anterior, debe aplicarse por identidad jurídica la tesis aislada bajo registro número 225545, sustentada por el primer tribunal colegiado del noveno circuito, en materia civil, de la octava época, visible en la página 136, del semanario judicial de la federación y su gaceta, que es como sigue:-----

“COMPRAVENTA. SOLO SON CAUSAS DE PEDIR SU NULIDAD LAS PREVISTAS POR LA LEY Y NO LAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO (LEGISLACION DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI). La falta de cumplimiento por parte del comprador respecto al pago del resto del precio pactado en una compraventa, sólo puede dar lugar a que el vendedor pueda demandar el pago de los réditos correspondientes, o bien ejercitar la acción de rescisión del contrato, al tenor de lo dispuesto por los artículos 2088 y 2131 del Código Civil del Estado de San Luis Potosí, mas no da derecho al vendedor de pedir la nulidad de la escritura, aun cuando así hubiesen pactado las partes contratantes, pues las causas que pueden dar lugar a demandar la nulidad se encuentran previstas en la ley, como son: la ilicitud en el objeto, en el fin o en la condición del acto, la falta de forma exigida por la legislación civil, el error, el dolo, la violencia, la lesión y la incapacidad de cualquiera de las partes. Y si bien es cierto que en materia de contratos la voluntad de las

partes es la suprema ley y que éstas pueden incluir las cláusulas que estimen convenientes, también lo es que dicho principio no rige en el caso, en razón de que la voluntad de los particulares sólo puede ejercitarse dentro de los cauces de la Ley, es decir, no puede la voluntad individual modificar ni rebasar lo establecido por la Ley. Así lo dispone el artículo 6o, del Código Civil para el Distrito Federal que rige para toda la República en Materia Federal, al expresar: "La voluntad de los particulares no puede eximir la observancia de la Ley ni alterarla o modificarla". En tales condiciones, si la Ley Civil establece el derecho de pedir la nulidad, con las causas previstas en la legislación aplicable, no es jurídicamente posible que por voluntad de los contratantes se pueda pedir, la nulidad con base en una causa distinta de las previstas por la ley, y de aceptarse así, tendría que concluirse también que los particulares pueden, en un contrato civil, crear derechos que la ley no otorga, lo cual como ha quedado demostrado es inadmisibile.(lo subrayado es de la titular)"- - - - -

Por tanto, si de autos no se aprecia que hayan probado con prueba alguna e idónea su acción personal de nulidad de la escritura pública número notarial número 1614, volumen 25, de 30 de junio de 2016, que contiene el testamento público abierto, otorgado por el extinto ***** *****, como antes quedo argumentado; es lógico y jurídico concluir que su acción es improcedente. - - - - -



En su segundo agravio alegan básicamente que, les causa perjuicio la sentencia definitiva de 24 de mayo de 2024, porque el juez natural declaró improcedente el juicio ordinario civil de nulidad de donación celebrado en la escritura pública número 481, volumen número 07, de 24 de septiembre de 2014, pasado ante la fe del licenciado LUIS ALBERTO ALBORES FIGUEROA, en su calidad de notario público número 178 del Estado, celebrado entre ***** , en su carácter de donante (ahora extinto) y ***** , en su calidad donatarias, violentando los artículos 157 y 202 de la Ley del Notariado del Estado de Chiapas y 2318 del Código Civil del Estado, porque aseguran que si una de las partes no exhibe los documentos que tiene en su poder se tendrá por cierta las afirmaciones de la contraparte, de acuerdo a lo establecido en el artículo 295 del Código de Procedimientos Civiles del Estado; por ello, aducen que el protocolo del testamento carece de la firma y huella dactilar del testador; además alegan que en la audiencia confesional a cargo del licenciado LUIS ALBERTO ALBORES FIGUEROA, en su calidad de notario público número 178 del Estado, no compareció a la diligencia y que se le tuvo por confeso en términos del artículo 316 del Código Procesal Civil del Estado; por tanto, solicitan se revoque la sentencia recurrida. - - - - -

El presente argumento defensivo resulta infundado, toda vez que el juez natural de forma correcta, fundada y motivada declaró improcedente el juicio ordinario civil de nulidad de donación celebrado en la escritura pública número 481, volumen número 07, de 24 de septiembre de 2014, pasado ante la fe del licenciado LUIS ALBERTO ALBORES FIGUEROA, en



RITO MARTIN CERVANTES REYES, señalando los puntos sobre los que versaría la citada probanza; no obstante, no procuraron el desahogo de la citada prueba, lo que era menester por ser la idónea para acreditar su acción intentada; por lo que, al tratarse de una materia que es de estricto derecho, este Cuerpo Colegiado se encuentra impedido para subsanar descuidos o desinterés de las partes litigantes (actores y codemandados); por ende, deben resentir las consecuencias jurídicas que tal descuido les depara y su agravio es por demás infundado. - - - - -

Bajo esa óptica, cabe patentizar que al no vigilar el correcto y oportuno desahogo de la prueba pericial en materia de dactiloscopia, que en este caso es la prueba idónea, por cuanto que pretenden la nulidad absoluta de la escritura pública número 481, volumen número 07, de 24 de septiembre de 2014, pasado ante la fe del licenciado LUIS ALBERTO ALBORES FIGUEROA, en su calidad de notario público número 178 del Estado, celebrado entre ***** ***** ***** , en su carácter de donante (ahora extinto) y ***** * ***** ***** ** ***** ***** ***** , en su calidad de donatarias, porque señalaron que el donante no firmo ni es su huella la que aparece en el referido contrato de donación, pues el hecho de que se haya tenido por ciertos los hechos de la demanda y que se haya declarado confeso al licenciado LUIS ALBERTO ALBORES FIGUEROA, en su calidad de notario público número 178 del Estado, si bien es verdad merece valor en términos de los artículos 295 y 316 del Código Adjetivo Civil del Estado; empero, no merece el alcance pretendido, por cuanto que se itera, la prueba idónea para demostrar que la huella que aparece en el contrato de donación

no pertenece al donante, es la pericial en materia de dactiloscopia; por eso, el agravio analizado es infundado. - - - -

Aunado que, en el contrato de donación pura y simple de 24 de septiembre de 2014, llevado a cabo en el instrumento notarial número 481, volumen 07, pasado ante la fe del licenciado LUIS ALBERTO ALBORES FIGUEROA, en su calidad de notario público número 178 del Estado, se cumplieron las exigencias señaladas en los artículos 1768, 1770, 1777, 2306, 2309, 2312, 2314 y 2318, del Código Civil Vigente en el Estado de Chiapas; además que, fue debidamente inscrito el 23 de noviembre de 2016, ante el delegado del registro público de la propiedad del distrito judicial de Copainalá, Chiapas, en la sección primera, número 662, del libro tres; por lo que, dicho contrato cumple con el principio de oponibilidad del acto jurídico, o sea, surte efectos erga omnes (frente a terceros); por lo tanto, el contrato de donación es válido y existente jurídicamente. - - - -

Al efecto, los artículos 1768, 1770, 2306, 2309, 2312, 2314 y 2318 ídem, disponen lo siguiente:- - - - -

“ARTICULO. 1768.- PARA LA EXISTENCIA DEL CONTRATO, SE REQUIERE:

I. CONSENTIMIENTO;

II. OBJETO QUE PUEDA SER MATERIA DEL CONTRATO.”- - - -

“ARTICULO. 1770.- LOS CONTRATOS SE PERFECCIONAN POR EL MERO CONSENTIMIENTO; EXCEPTO AQUELLOS QUE DEBEN REVESTIR UNA FORMA ESTABLECIDA POR LA LEY. DESDE QUE SE



PERFECCIONAN OBLIGAN A LOS CONTRATANTES, NO SOLO AL CUMPLIMIENTO DE LO EXPRESAMENTE PACTADO, SINO TAMBIEN A LAS CONSECUENCIAS, QUE, SEGUN SU NATURALEZA, SON CONFORME A LA BUENA FE AL USO O A LA LEY.(lo subrayado es nuestro)"- - - - -

“**ARTÍCULO 2306.-** DONACIÓN ES UN CONTRATO POR EL QUE UNA PERSONA TRANSFIERE A OTRA, GRATUITAMENTE, UNA PARTE O LA TOTALIDAD DE SUS BIENES PRESENTES.”- - - - -

“**ARTÍCULO 2309.-** PURA ES LA DONACIÓN QUE SE OTORGA EN TÉRMINOS ABSOLUTOS, Y CONDICIONAL LA QUE DEPENDE DE ALGÚN ACONTECIMIENTO INCIERTO.”- - - - -

“**ARTÍCULO 2312.-** LAS DONACIONES SÓLO PUEDEN TENER LUGAR ENTRE VIVOS Y NO PUEDEN REVOCARSE, SINO EN LOS CASOS DECLARADOS EN LA LEY.”- - - - -

“**ARTÍCULO 2314.-** LA DONACIÓN ES PERFECTA DESDE QUE EL DONATARIO LA ACEPTA Y HACE SABER LA ACEPTACIÓN AL DONADOR.”- - - - -

“**ARTÍCULO 2318.-** SI EL VALOR DE LOS MUEBLES EXCEDE DE CIEN PESOS, PERO NO DE QUINIENTOS, LA DONACIÓN DEBE HACERSE POR ESCRITO. SI EXCEDE DE QUINIENTOS PESOS, LA DONACIÓN SE REDUCIRÁ A ESCRITURA PÚBLICA.”- - - - -

En ese contexto, debe decirse que si la donación es un contrato por el que una persona transfiere a otra, gratuitamente, una parte o la totalidad de sus bienes presentes; también lo es que las donaciones sólo pueden tener lugar entre vivos y no pueden revocarse o anularse, sino en los casos declarados en la ley y por personas legitimadas para ello, además, la donación es perfecta desde que el donatario la acepta y hace saber la aceptación al donador; máxime que, la donación fue celebrada en el instrumento público número 481, volumen 07, pasado ante la fe del licenciado LUIS ALBERTO ALBORES FIGUEROA, en su calidad de notario público número 178 del Estado; por tal motivo, se cumplieron con los requisitos establecidos en los artículos 1768, 1770, 1777, 2306, 2309, 2312, 2314 y 2318, del Código Civil Vigente en el Estado de Chiapas; es más, fue debidamente inscrito ante el delegado del registro público de la propiedad del distrito judicial de Copainalá, Chiapas; por eso, el contrato de donación nació a la vida jurídica desde que otorgaron su consentimiento el donante y las donatarias (codemandadas); por lo tanto, dicho acto jurídico es existente y valido. - - - - -

Bajo esa tesitura, debe señalarse que para la existencia de los actos jurídicos, deben obrar requisitos de existencia y validez, los de existencia, son el objeto, el consentimiento y la solemnidad y, los requisitos de validez, son la forma, la capacidad de las partes, que el objeto sea lícito, y que haya ausencia de vicios del consentimiento (dolo, lesión, mala fe, error y violencia), una vez cumplimentado éstos requisitos el acto jurídico sea cual fuera su naturaleza adquiere existencia y validez, y en consecuencia, surte efectos erga omnes(frente a



terceros); por ende, éste tribunal de alzada concluye que en el multicitado contrato de donación, cumple con tales requisitos¹.- -

Para mayor ilustración, es necesario hacer el siguiente cuadro de referencia de los requisitos del contrato:- - - - -

REQUISITOS DE TODO ACTO JURÍDICO:	
<u>DE EXISTENCIA O ESENCIALES:</u>	<u>DE VALIDEZ:</u>
1.- Objeto	1.- Capacidad de las partes
2.- Consentimiento	2.- Forma
3.- Solemnidad.	3.- Objeto lícito
	4.- Ausencia de vicios en el consentimiento (error, dolo, lesión, mala fe o violencia)

En ese sentido, debe decirse que el inconforme no acreditó su acción intentada, puesto que no materializó la prueba pericial en materia de dactiloscopia, por resultar idónea para pretender la nulidad del contrato de donación de 24 de septiembre de 2014, celebrado en el instrumento público número 481, volumen 07, pasado ante la fe del licenciado LUIS ALBERTO ALBORES FIGUEROA, en su calidad de notario público número 178 del Estado, por manifestar que la huella que aparece en el protocolo del citado acto jurídico no pertenece al donante ahora extinto *****; de ahí que, su agravio es infundado. - - - -

Por otra parte, resulta inoperante lo argumentado por el discrepante en razón de que no combate la sentencia motivo de

¹ http://html.rincondelvago.com/actos-juridicos_3.html

la apelación, sino únicamente se limita a mencionar los artículos 176 y 202 de la Ley del Notariado del Estado de Chiapas y artículos 1497, 1505 y 2318 del Código Civil del Estado; por ello, debe decirse que las simples manifestaciones hechas por el inconforme aduciendo infracción de preceptos legales y transcribiendo párrafos de ellos, no pueden considerarse motivos de disenso si no expone argumentos concretos para demostrar que en el fallo impugnado se conculcaron los preceptos citados. Además, se debe expresar cuál es la lesión que se causa, así como los motivos que originaron el agravio, a fin de que puedan ser examinados; por ello, su agravio deviene inoperante.- - - - -

Para sustentar lo anterior, debe aplicarse la tesis aislada bajo registro número 2011952, aprobada por la segunda sala del más alto tribunal, en materia común, de la décima época, tomo II, visible en la página 1205, del semanario judicial de la federación y su gaceta, que es del epígrafe siguiente:- - - - -

“AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS EN LOS QUE EL RECURRENTE SÓLO MANIFIESTA QUE LA SENTENCIA IMPUGNADA VIOLA DIVERSOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES O LEGALES Y LOS TRANSCRIBE. *Los agravios constituyen el conjunto de enunciados concretos respecto a cuestiones debatidas en un juicio, manifestados a través de razonamientos lógico-jurídicos tendientes a desvirtuar los argumentos y conclusiones del órgano jurisdiccional. Por tanto, la transcripción de los preceptos constitucionales o legales que se consideran violados no*

puede ser suficiente para formular un agravio, pues no basta la simple expresión de manifestaciones generales y abstractas, sino que es necesario precisar la manera en que se actualizan los perjuicios a que se refiere y explicar las consecuencias que, en su caso, se hayan producido. En ese sentido, si el recurrente únicamente se limita a manifestar que la sentencia impugnada viola en su perjuicio diversas disposiciones constitucionales o legales y las transcribe, careciendo de una estructura lógico-jurídica, dicho agravio debe calificarse de inoperante.”- - - - -

IV. En la especie, al darse la hipótesis prevista en la fracción IV, del artículo 140, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas, se hace condena al pago de costas en AMBAS INSTANCIAS, a los actores ahora apelantes, a favor de la parte demandada del juicio natural, como enseguida se verá.-

Se argumenta lo anterior, porque el artículo 140, fracción IV ídem, establece que la condenación en costas se hará cuando así lo prevenga la ley, o cuando, a juicio del Juez, se haya procedido con temeridad o mala fe y que siempre será condenado el que lo fuere por dos sentencias conformes de toda conformidad en su parte resolutive, es decir, existe en la especie una condenación forzosa; por lo que la condenación comprenderá las costas de ambas instancias.

Ello es así, porque del precepto legal citado con antelación, señala un sistema mixto de condena de costas, conformado por un criterio subjetivo y otro objetivo; en relación con el primero de

ellos, atribuye al juzgador facultades para condenar en costas a la parte que, a su juicio, haya actuado con temeridad o mala fe; respecto del segundo, atribuye al juzgador a condenar en costas a la parte que se sitúo en alguna de las hipótesis previstas por el segundo párrafo del aludido numeral; de donde se tiene que en cuanto al primero de los criterios, queda a opinión del juzgador, no así por lo que hace al segundo de ellos, que compete al juzgador a imponer una condena en costas, lo que se colige de la frase “siempre serán condenados”, que precede a las fracciones que enumeran los casos en particular para la condena en costas, lo que desde luego es ajeno al criterio subjetivo. - - - - -

De lo anterior, debe concluirse que nos encontramos ante una condena forzosa, en virtud de que al existir dos sentencias conformes de toda conformidad, es decir, que existen dos sentencias en las que se resuelve medularmente lo mismo, en el caso, una absolución a la demandada de las prestaciones reclamadas por los apelantes, confirmando tal resolución este Cuerpo Colegiado; por ende, se actualiza la hipótesis establecida en la fracción IV, del artículo 140 ibídem. - - - - -

Al respecto, el artículo 140 del Código Adjetivo Civil del Estado, establece: - - - - -

“Artículo 140.- La condenación en costas se hará cuando así lo prevenga la ley, o cuando, a juicio del juez, se haya procedido con temeridad o mala fe.

Siempre serán condenados:



- I. *El que ninguna prueba rinda para justificar su acción o su excepción, si se funda en hechos disputados;*

- II. *El que presentare instrumentos o documentos falsos, o testigos falsos o sobornados;*

- III. *El que fuere condenado en los juicios ejecutivos, hipotecarios, en los juicios de retener y recuperar, y el que intente alguno de estos juicios si no obtiene sentencia favorable. En estos casos la condenación se hará en la primera instancia, observándose en la segunda lo dispuesto en la fracción siguiente;*

- IV. *El que fuere condenado por dos sentencias conformes de toda conformidad en su parte resolutive, sin tomar en cuenta la declaración sobre costas. En este caso, la condenación comprenderá las costas de ambas instancias.(lo subrayado es nuestro)"- - - - -*

Soporta lo anterior, la jurisprudencia por contradicción, bajo registro número 164606, Aprobada por la Primera Sala del Más Alto Tribunal, en sesión de fecha dos diciembre de dos mil nueve, en Materia Civil, de la Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Visible en la Página número 319, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente:- - - - -

**“COSTAS. SU CONDENA CON BASE EN EL
ARTÍCULO 139 DEL CÓDIGO DE**

PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL DISTRITO FEDERAL CONSTITUYE UN SUPUESTO OBJETIVO.

El artículo 140 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, cuyo texto es equivalente al del artículo 1084 del Código de Comercio, establece una excepción al principio general de que cada parte será responsable de sus propios gastos y costas. Dichos artículos disponen un sistema mixto para la condena en costas, conformado por un criterio subjetivo y otro objetivo. El criterio subjetivo atribuye al juez la facultad de condenar en costas a la parte que, a su juicio, haya actuado con temeridad o mala fe. El criterio objetivo constriñe al juzgador a condenar en costas a la parte que se sitúe en alguna de las hipótesis previstas por la ley para la condena en costas. Como se puede apreciar, el criterio subjetivo queda a la valoración del juez; por el contrario, el criterio objetivo establece en forma específica los casos en los que el juzgador está constreñido a imponer una condena en costas, lo cual se desprende de la frase "siempre serán condenados" que precede a las fracciones que enumeran los casos específicos para la condena en costas. Por su parte, el artículo 139 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal dispone, en forma categórica, que "El pago de los gastos será a cargo del que faltare al cumplimiento de la obligación". Dicha disposición se introdujo en la reforma aprobada en el año de mil novecientos noventa y seis, con el objeto de desalentar el uso de los recursos legales para evitar o retrasar el cumplimiento de obligaciones. De ahí que establece



otro supuesto objetivo para la condena en costas en los juicios civiles, que es ajeno al criterio subjetivo contemplado por el artículo 140 de dicho código procesal que obliga al juez a condenar en costas a la parte que, a su juicio, haya actuado con temeridad o mala fe, y que es ajeno también a los otros supuestos objetivos previstos en las fracciones de dicho artículo 140.”- - - - -

En las relatadas condiciones, al resultar infundados e inoperantes los agravios expuestos por los discrepantes, lo que procede es **CONFIRMAR** la sentencia impugnada.- - - - -

Por lo expuesto, motivado y fundado, ésta Sala:- - - - -

R E S U E L V E:

PRIMERO: Se **CONFIRMA** la sentencia definitiva de 24 de mayo de 2024, pronunciada por el Juez del Ramo Civil del Distrito Judicial de COPAINALÁ, con residencia en Copainalá, Chiapas, en el expediente número 96/2017, relativo al Juicio Ordinario Civil de Nulidad de Testamento y Donación, promovido por *****
en contra de *****
*****; el licenciado LUIS ALBERTO ALBORES FIGUEROA, en su calidad de notario público número 178 del Estado y DELEGADO DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE COPAINALÁ,. CHIAPAS.- - - - -

SEGUNDO: Se condena al pago de costas en ambas instancias a los recurrentes, al darse la hipótesis prevista en la

fracción IV, del artículo 140 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas, esto es, a favor de la parte demandada del juicio principal.- - - - -

TERCERO.- Con testimonio autorizado de la presente resolución, comuníquese al Juez Natural lo resuelto en este toca y devuélvase los autos originales y los documentos anexados al mismo. Oportunamente, archívese el toca como asunto concluido.- Notifíquese y cúmplase. - - - - -

Así lo resolvieron los Ciudadanos Magistrados que integran la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil Zona 01, Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Licenciados GUILLERMO HORACIO ESPONDA ORANTES, MARIA ITZEL BALLINAS BARBOSA, y CLAUDIA LUCIA DOMINGUEZ ACUÑA, siendo presidenta la tercera de las nombradas y ponente el primero de los citados, y firman por ante la licenciada CLAUDIA VIDAL HERNANDEZ, Secretaria General de Acuerdos de ésta Sala, que da fé.-
GHEO/DDAY/gmml.

MAGISTRADA PRESIDENTA

LIC. CLAUDIA LUCIA DOMINGUEZ ACUÑA.

MAGISTRADA PONENCIA “A” MAGISTRADO PONENCIA “B”

**LIC. MARIA ITZEL BALLINAS BARBOSA. LIC. GUILLERMO HORACIO ESPONDA
ORANTES.**

**SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS:****LIC. CLAUDIA VIDAL HERNANDEZ.**

ELIMINADO: 26 elementos. FUNDAMENTO LEGAL: Artículo 6, apartado A, fracción II y 16 párrafo segundo de la constitución política de los Estado Unidos Mexicanos; 3 de la Constitución Política del estado libre y Soberano de Chiapas; 100, 106 fracción III, 107 y 116 de la ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 6 de la ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 134, 139, y 140 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas; 4 fracción II, 12 y 13 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas; Séptimo fracción III y Trigésimo Octavo fracciones I y II de los lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. **MOTIVO:** se trata de información confidencial concerniente a datos personales identificativos.